

ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ACUERDO NÚMERO: CTFGJEZ/UT/038/2024

NÚMERO DE FOLIO: 321103824000381

LCDO. SALVADOR EDUARDO VILLA ALMARAZ, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y Presidente del Comité de Transparencia, **MTRO. JUAN CARLOS VALDIVIA MERAZ**, Vicefiscal de Apoyo Procesal y Vocal del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y el **MTRO. JOSÉ REFUGIO MEDINA NÚÑEZ**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal del Comité de Transparencia, en ejercicio de las atribuciones que nos confieren el artículo 11 apartado H, 13 fracción III, 19, 20 fracción V, 25 y 65 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas; 27, 28, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; 6, 8, 113 y 116 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 3 fracción VIII, 6, 7, 8 y 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, y,

VISTO para resolver la solicitud de acceso a la información pública, presentada por **Diana** a través del Sistema Nacional de Transparencia ante la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, y

RESULTANDO

PRIMERO. - El 17 de septiembre de 2024 por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, se recibió una solicitud de información por parte de **Diana**, por medio del cual requiere a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, lo siguiente:

"...el lugar del hallazgo de las personas fallecidas identificadas con el INE correspondiente al Estado de Jalisco" (Sic)

SEGUNDO. - De conformidad con el artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, se admitió a trámite la solicitud de información con el número de folio **321103824000381**.

TERCERO. - En términos de lo establecido en el ordinal 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, se turnó la solicitud de información a la Dirección General de Servicios Periciales, que, a través de su departamento de identificación humana, tiene a su cargo el resguardo y la identificación de los cadáveres no identificados de personas desaparecidas a la cual se dio respuesta mediante oficio No. DGSP 910/2024, a través del cual se informa que la información relativa al lugar exacto en que se realizó el hallazgo de cadáveres es información de naturaleza reservada. Asimismo, se requirió información a la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares, toda vez que es el área encargada por sí o a través de la unidad especializada, de la investigación

de los delitos en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares a la cual se dio respuesta mediante oficio 32000 en los mismos términos.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Este Comité de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas se encuentra facultado para conocer, dictar los acuerdos necesarios y resolver el presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11 apartado H, fracción V de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas; artículos 8, 43, 44, 103, 104, 113 y 114 de la Ley General de Transparencia, así como lo dispuesto por los artículos 69, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 82 fracciones I y III, 83, y 106, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

SEGUNDO. - El folio que nos ocupa, solicita, entre otras cosas, el lugar del hallazgo de las personas fallecidas en el Estado de Zacatecas, identificadas con INE correspondiente a Jalisco.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas en la fracción III del artículo 82, establece que la información reservada podrá clasificarse cuando:

I y II

III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

IV a la XI.

Lo anterior, en armonía con la fracción III del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

Por lo que a fin de resolver respecto a dicha solicitud de información se considera lo siguiente:

El artículo 6º, párrafo cuarto, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la información que posee cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes.

Por su parte, el párrafo noveno del similar 21 del mismo ordenamiento señala que la seguridad pública, comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

Al respecto, el artículo 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas establece que son funciones del Ministerio Público, allegarse, requerir y presentar las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito.

Dicho lo anterior, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su ordinal 113 fracciones I, V y VII, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, en sus artículos 4 y 82 fracciones I y III; establecen excepciones a esa obligación, al permitir clasificar la información como reservada cuando: comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; obstruya la prevención o persecución de los delitos.

Para tal efecto, con fecha 15 de abril de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el INAI, los cuales señalan que **los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.**

Es por eso que sirve como sustento para la presente clasificación de información, **el Punto Vigésimo Sexto. De conformidad con el artículo 113 fracción VII de la ley general, podrá considerarse como información reservada, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, toda vez que se dicha información se relaciona con la existencia de carpetas de investigación en trámite. Asimismo, existe un vínculo entre la información solicitada y la carpeta de investigación y su difusión puede impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público durante la etapa de investigación.**

En esa tesitura, resulta procedente realizar la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, por lo que se analiza lo siguiente:

a. **La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.**

No pasa desapercibido para este Comité la situación de inseguridad que prevalece en el Estado de Zacatecas, pues si bien, desde la Fiscalía General de Justicia del Estado se está haciendo un enorme esfuerzo para abatir la impunidad y, en consecuencia coadyuvar a la disminución de la incidencia delictiva, también es cierto que la desaparición de personas es un grave fenómeno que ocurre en México, es un delito y una violación grave a los derechos humanos de las víctimas directas tales como la libertad personal, integridad física y emocional. Sin embargo, también se ven afectados los derechos de las víctimas indirectas que sufren permanentemente una grave violación a muchos de sus derechos, como son la integridad psíquica y moral. Es por eso que uno de los principios rectores en la materia, es el de enfoque humanitario, el

cual refiere que la atención debe estar centrada en el alivio del sufrimiento, de la incertidumbre y basada en la necesidad de respuestas a los familiares. Uno de los mecanismos para mitigar dicho sufrimiento, es a través del respeto a su privacidad e intimidad y, no menos importante, el derecho a la verdad, que no es otra cosa, que la respuesta ante la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental.

Por otro lado, las autoridades encargadas de la investigación de los delitos, debe llevar a cabo todos los actos de investigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos y a su vez, evitar cualquier injerencia por parte de terceros no legitimados a fin de que no se menoscabe la línea de investigación. Para tal efecto, el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los registros de la investigación y todas aquellas cosas que le estén relacionadas, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos.

Tal es la importancia que revisten dichos registros, que el numeral 228 del mismo ordenamiento señala que la cadena de custodia, es responsabilidad de quienes, en cumplimiento de las funciones propias del encargo o actividad, en los términos de la ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Dicho esto, aquellos servidores públicos que no observen el presente, serán acreedores a las sanciones de naturaleza administrativa o penal a que haya lugar.

De lo anterior se desprende la necesidad de preservar el sigilo respecto de los indicios que forman parte de una investigación, en particular de los restos humanos bajo el resguardo de la Fiscalía a fin de preservar los derechos post mortem tanto en el tema procesal como en el práctico e interpretativo siempre con base en el principio de progresividad, así como todos aquellos elementos que le estén relacionados con los actos de investigación en la etapa inicial de investigación como es el lugar del hallazgo de los cadáveres, toda vez que dicha información, aporta una herramienta poderosa a los grupos delincuenciales para llevar a cabo actos de contrainteligencia.

Al respecto, el artículo 40 fracción XXI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece la obligación de las instituciones de Seguridad Pública de no proporcionar información a quien no tenga derecho.

“Artículo 40: Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

(...)

XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o

confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión; "(sic).

b. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda:

El derecho fundamental de acceso a la información pública no es absoluto y por tal motivo, se debe llevar a cabo un ejercicio de ponderación cuando dos o más derechos humanos se encuentran en pugna. En este caso en particular, por un lado, se encuentra el derecho del solicitante a conocer información que se genera por parte de esta Institución y por otro lado el derecho de la colectividad a vivir en un estado de paz, libre de criminalidad y en el cual, su vida, integridad y seguridad personal y patrimonial, se encuentren debidamente resguardados por el Estado, y

Tomando en cuenta que las bandas del crimen organizado constituyen un poder paralelo basado en terror y control territorial, se debe preservar la confidencialidad de la información a fin de evitar que se debiliten las estructuras del Estado encargadas de la seguridad pública, lo que implica que se deben tomar medidas más radicales para hacerle frente, para lo cual el Estado tiene la obligación de actuar bajo el principio de máxima protección.

No es menor, que una de las herramientas utilizadas por esas bandas, es la recopilación de información trascendental por cualquier medio, en ese sentido, la "teoría del mosaico" sostiene que, en materia de seguridad nacional, para determinar una reserva, no debe analizarse de manera aislada la información que se solicita, puesto que una información aparentemente inofensiva puede generar una afectación cuando se correlaciona con otras piezas que permitan tener una visión de conjunto. Es importante tomar en consideración la utilidad que pudiera tener para "cualquier persona" obtener datos específicos del personal que integra esta institución.

c. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio

La colisión de principios consiste en que dos normas, tomadas en sí mismas, concluyen a resultados recíprocamente contradictorios. Ninguna es inválida, ninguna tiene una precedencia absoluta. Lo que tenga validez dependerá de qué decisión deba adoptar a la luz de las circunstancias del caso concreto.

La finalidad de preservar el sigilo es evitar que personas ajenas a la institución y que, en un momento determinado, pudieran ser miembros del crimen organizado, lleven a cabo actos de contrainteligencia, asimismo que se vulneren los datos personales de las víctimas, así como su derecho a dignidad, intimidad y privacidad, de los cuales prevalece su protección por encima del derecho de acceso a la información.

CUARTO. - En términos de lo dispuesto en los artículos, 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; 4, fracción VI del artículo 24, fracción II del artículo 44, 100 y párrafo segundo del 101 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus correlativos de la ley estatal en la materia, el Comité de Transparencia confirma la RESERVA DE LA INFORMACIÓN por un periodo de CINCO años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo,

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en observancia y seguimiento a la solicitud de información 321103824000381 realizada mediante el Sistema Plataforma Nacional de Transparencia, se

RESUELVE

PRIMERO. Se RESERVA LA INFORMACIÓN por un periodo de CINCO años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en los Estrados de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Así lo determinamos los integrantes del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en Sesión celebrada el día 15 de octubre de 2024 en la Sala de Prensa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, ubicada en Circuito Zacatecas número 401, tercer Piso, Colonia Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zacatecas, quienes firmamos al margen y al calce la presente Acta y damos constancia para los efectos legales a que haya lugar.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. SALVADOR EDUARDO VILLA ALMARAZ
Fiscal Especializado en Combate
a la Corrupción

VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

MTRO. JUAN CARLOS VALDIVIA MERAZ,
Vicefiscal de Apoyo Procesal

VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

MTRO. JOSÉ REFUGIO MEDINA NÚÑEZ
Titular del Órgano Interno de Control